

## ¡Oh balancé, balancé!

LUIS IGNACIO PARADA

**H**ubo una vez un hombre de apariencia normal que fue al sastre a hacerse un traje a la medida. Le sobraba un palmo de la pernera derecha, le faltaba una cuarta de la manga izquierda, una hombrera colgaba por delante y otra por detrás. Las solapas estaban torcidas y los bolsillos del pantalón bizqueaban, uno a la altura de la rodilla y otro en mitad de la cadera. El sufrido cliente apuntó una tímida protesta. Pero el orgulloso sastre le obligó a estirarse, retorcerse, encogerse

hasta que consiguió que la pieza le encajara sin holguras ni estrecheces. Entonces gritó indignado: «¡Hay que fastidiarse, con lo mal hecho que está usted y lo bien que le sienta el traje!». Esa es exactamente la historia de la economía española y de la política económica de los últimos diez años. El Gobierno —sastre, prepotente y satisfecho— insiste en que ha diseñado un modelo que le sienta como un guante al ciudadano-empresario-contribuyente. Y cuando el cliente protesta por el recorte

**«El consumo privado se ha multiplicado entre 1982 y 1991 por 2,5; el PIB a precios de mercado ha crecido en la misma proporción. Pero el consumo público se ha multiplicado por 3,1 y los impuestos ligados a la producción y a la importación por 5,5.»**

de las libertades económicas, la rigidez de los mercados, la desmesura de los impuestos; cuando se queja de los altos tipos de interés y de la sobrevaloración de la peseta; cuando clama contra las altas cotizaciones sociales, la inflexibilidad de las plantillas y el coste del despido, el «artista» se recrea en su obra y acusa al «cliente» de «estar mal hecho». Seguramente es verdad y el problema de la economía española es de cirugía y no de sastrería. Pero la política económica, entonces, de-

bería dejar de ser un asunto de «El sastrecillo valiente» y ser el objetivo fundamental de «El flautista de Hamelin».

El consumo privado se ha multiplicado entre 1982 y 1991 por 2,5; la misma proporción que el PIB a precios de mercado. Pero el consumo público se ha multiplicado por 3,09 y los impuestos ligados a la producción y a la importación por 5,5: es la evidencia de la progresiva invasión del Estado en la actividad económica. Tanto en períodos de rece-

sión como de expansión el Gobierno—que acaba de cumplir diez años en el Poder ha utilizado la misma política económica —monetaria, fiscal, presupuestaria, de rentas y precios y de tipo de cambio— basada en altos tipos de interés para contener la inflación; regulación del crédito bancario para controlar la expansión del consumo; encarecimiento artificial de la peseta para lograr un alto volumen de reservas, y una política de pensiones y subvenciones orientada a la captación de votos. Ninguna de estas decisiones ha podido encubrir la obsesión por atraer capital extranjero a cualquier precio, el aumento del endeudamiento público y el crecimiento permanente de la presión fiscal.

**D**urante diez años se han subido los impuestos no con el objetivo de financiar la inversión sino para dedicarlos al gasto corriente, pago de más funcionarios públicos, grandes acontecimientos universales y captura del voto. No se han aprovechado los años de bonanza internacional — con la caída de los precios del petróleo y del dólar— para llevar a cabo la reconversión industrial del país y el saneamiento del sector público.

Mientras en 1977 el gasto público representaba el 24,9% del PIB, en 1990 había alcanzado el 43,3%. La práctica totalidad de esos recursos se ha ido en intereses de la deuda, transferencias, subvenciones, sueldos públicos, pensiones y subsidios. La presión fiscal que soportábamos los contribuyentes españoles en 1975 equivalía al 21,6% del PIB; en 1990 ascendía hasta un 35%; en aquel año no existía déficit público; en 1991 alcanzó el 4,5% del PIB: una auténtica escalada con talante con-fiscatorio para unos objetivos políticos que se

han revelado ineficientes, mientras la Administración tributaria permanece impasible ante la evidencia de sus propias investigaciones según las cuales existe un nivel de fraude del 45% en el IRPF y un 39% en el IVA.

**P**ara alimentar el déficit público se emite Deuda del Estado que es tanto como retirar dinero del mercado que podría destinarse a actividades productivas. En 1977 esa deuda representaba el 12,7% del PIB; en 1990 el 30,2. Todo ello ha provocado una débil tasa de cre-

*«Mientras en 1977 el gasto público representaba el 24,9 por ciento del PIB, en 1990 había alcanzado el 43,3 por ciento. La práctica totalidad de esos recursos se ha ido en intereses de la deuda, transferencias, subvenciones, sueldos públicos, pensiones y subsidio».*

cimiento económico, pérdida de competitividad de la economía española, incapacidad de generar empleo, mentalidad consumista provocada por la penalización fiscal del ahorro, crecimiento de los salarios por encima de la productividad y de los ritmos de creación de empleo, triunfo de las actividades especulativas frente a las de inversión, moral del pelotazo, no del trabajo bien hecho; crecimiento del consumo, no del ahorro; de la especulación, no de la inversión.

Desde el pasado mes de junio hasta finales de octubre

los indicadores vienen señalando un notable descenso de la licitación pública, del consumo de cemento y fuel oil, y una clara recesión de la inversión privada. Estamos tres puntos por encima de la inflación media de la CE; tenemos triple proporción de paro sobre población activa; nuestras importaciones doblan a nuestras exportaciones; nuestro déficit comercial es de 2,5 billones; nuestro déficit presupuestario de 1,5 billones. En el primer trimestre se perdieron 110.000 puestos de trabajo. Los valores que cotizan en Bolsa valen 1,5 billones menos que a comienzos de año.

¿Va a aguantar el mismo Gobierno la destrucción de empleo, la reducción de la inversión, la pérdida de competitividad, el agujero de los déficit comercial y público, sin nuevas políticas monetaria, presupuestaria, fiscal, de rentas, de precios y de tipo de cambio? En todos los países de la Comunidad Europea, salvo Dinamarca, Holanda e Italia, el déficit público viene descendiendo desde 1987 y en algunos países como Francia, Reino Unido e Irlanda, desde 1985; nuestros principales competidores comunitarios mantienen déficit públicos sensiblemente inferiores al español —0,1% del PIB en el Reino Unido; 1,2% en Francia; 1,3% en Dinamarca; 1,7% en Irlanda y 3,1% en Alemania—. En nuestra nación, en cambio, lleva creciendo cuatro años en términos nominales y reales y lo peor es que se está produciendo en el mismo período en que crece imparablemente la presión fiscal, lo que va a llevar a que la Deuda total del Estado supere los 26 billones de pesetas al terminar el año, cifra que duplica con creces los 10,9 billones de endeudamiento público de 1985.

no de cada diez trabajadores, en este país, es funcionario del Estado; otro está empleado por las Autonomías, los Ayuntamientos o las empresas públicas; **U** otro más cobra su sueldo de algún suministro, servicio o contrata con las Administraciones Públicas, y otros cuatro hacen recaer buena parte de sus ingresos sobre la Seguridad Social, pensiones, Seguro de Desempleo o subvenciones de cualquier tipo. Así pues, siete de cada diez viven «enganchados al Presupuesto». Entretanto, España es el cuarto peor país del grupo de la OCDE en red de carreteras; esta-

mos entre los tres menos desarrollados en comunicaciones; los altos tipos de interés dificultan la disponibilidad de capital de las empresas; el número de funcionarios, el gasto público y la presión fiscal están creciendo imparablemente desde 1983: todo contribuye a hacer de la economía española una de las cinco menos competitivas del conjunto de la OCDE.

Importamos casi el doble de lo que exportamos y el resultado de estas decisiones de compra —motivadas por nuestra falta de competitividad— es que estamos creando

**«Importamos casi el doble de lo que exportamos y el resultado de estas decisiones de compra —motivadas por nuestra falta de competitividad— es que estamos creando empleo en los países de nuestro entorno, donde los productos tienen mejor relación calidad-precio que los españoles»**

empleo en los países de nuestro entorno, donde los productos tienen mejor relación calidad-precio que los españoles, mientras acumulamos, insensatamente, la mayor tasa de paro de toda Europa.

**H**asta la reciente devaluación y las posteriores medidas de control de cambios la cotización de la peseta ha encarecido nuestras exportaciones y abaratado las importaciones: era una forma de cumplir los compromisos con el SME, mostrar nuestra europeidad y hacer ver que podíamos integrarnos entre

los países que pueden ir en el vagón de alta velocidad.

España está hoy, pese a lo que se dice en los mítines, en el furgón de cola en el conjunto de países industrializados y sus niveles de competitividad muestran un deterioro progresivo. Si medimos la competitividad en términos de comercio exterior veremos que el índice de Tendencia de Competitividad de la Exportación permanece prácticamente estancado desde mediados de 1990 y, con base 1980 igual a cien, se ha situado en 88,4 a finales del primer cuatrimestre de 1992.

Si la medimos por varios factores combinados —precio del dinero, impuestos, regulación financiera, falta de investigación, deficiente dirección empresarial, inflexibilidad laboral e intervencionismo del Gobierno— como lo hace el Institute for Management Development (IMD), veremos que España ocupa el puesto número diecinueve entre los veintitrés países analizados de los veinticuatro que componen la OCDE.

Si, finalmente, se mide la competitividad con relación a los aspectos laborales, nuestro país también ocupa el último lugar en el conjunto de la OCDE por la gran conflictividad, la escasa flexibilidad laboral, la dispersa organización de la fuerza de trabajo y la falta de incentivos al trabajador, lo que resta atractivo a las inversiones productivas tanto nacionales como extranjeras.

Desde aquel mítico décimo puesto que una cierta propaganda interesada, una estadística imperfecta y un tipo de cambio de la peseta —que distorsionaba la realidad— habían situado a nuestro país cuando prácticamente empezaba a despertar del subdesarrollo, España figuraba en 1989 en el puesto número 42 en el conjunto de todas las naciones medido por el PNB por habitante, España estaba situada el año pasado en el decimoquinto.

**«¿ Va a aguantar el Gobierno la destrucción de empleo, la reducción de la inversión, la pérdida de competitividad, el agujero de los déficit comercial y público, sin nuevas políticas monetaria, presupuestaria, fiscal, de rentas, de precios y de tipo de cambio ?»**



Para aumentar la competitividad no cabe otra fórmula que aumentar la inversión, renovar tecnología y —por mucho que nos repugne desde el punto de vista de la deseable estabilidad en el empleo— favorecer la contratación temporal. Pero mal se va a lograr ese aumento de la competitividad si se aumenta el precio del dinero, se encarece la importación por la devaluación de la peseta y reduce la duración de los contratos temporales.

Todos queremos ser «eficaces y competitivos». Pero, lamentablemente esa eficacia y esa competitividad, para los políticos, no se mide en pesetas sino en dígitos de inflación; para los empresarios no en puestos de trabajo creados o en inversiones realizadas sino en beneficios y márgenes comerciales, y para los trabajadores no en menor inflación o mayor PIB sino en salarios más altos. Pero todos estamos haciendo de la eficacia y de la competitividad un juego de suma cero donde las ganancias de alguno de los participantes significan pérdidas equivalentes de otros: el balance de la última década ofrece más sombras que luces y, lo que es peor, en el futuro inmediato vamos a movernos «en la ardiente oscuridad». El traje que nos han hecho «a la medida» es un disfraz a mitad de camino entre Arlequín y Colombina.

Luis Ignacio Parada es periodista y columnista económico.